



México, D.F., Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2014 CESOP/CVyD/ 067/14

Atender la pobreza y la exclusión económica y social, fundamental para reducir la violencia

- Necesario tener gobiernos fuertes que no se intimiden por la violencia: CRIM-UNAM
- Conclusiones del debate público entre especialistas nacionales e internacionales

Los modelos para prevenir y reducir los índices de violencia en México deben tomar en cuenta experiencias de ciudades como Bogotá y Medellín en Colombia, donde para disminuir estos actos se atendió primero a la pobreza y la exclusión económica y social, se trabajó para eliminar la impunidad de los delitos y se construyó una cultura ciudadana de rechazo al crimen y la ilegalidad.

Estas fueron algunas de las consideraciones que se hicieron en el Seminario "Violencia: estrategias de contención y prevención de la violencia", organizado por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, en el marco del Seminario *Gobierno y Políticas Públicas,* donde especialistas en el tema establecieron la necesidad de construir un tejido social de integración entre la comunidad, funcionarios públicos y gobierno, para poder enfrentar y erradicar este problema.

Medardo Tapia Uribe, investigador del CRIM- UNAM, habló de otorgarle valor público a la seguridad ciudadana y mencionó que es necesario tener gobiernos fuertes que no se dejen intimidar por la violencia, y que además, atiendan los factores socioeconómicos estructurales que incitan a los ciudadanos a querer forma parte de la delincuencia.

El especialista presentó avances de una investigación del CRIM-UNAM titulada "Ciudades y ciudadanos mexicanos: gobierno y ciudadanos en la explicación y contención de la violencia", en la que además de rescatar temas como otorgarle valor público a la seguridad ciudadana, se propone regular la gestión policial, y construir capital social y político para colaborar con vecinos y autoridades.

En los resultados de la investigación se advierte que la violencia que se vive en México y América Latina no se puede medir con un solo indicador, porque eso ha llevado a la imprecisión de políticas públicas para la solución del tema, así que

deben tomarse en cuenta, por separado, los niveles de homicidios, delitos sexuales, privación de la libertad, entre otros.

Otro de los especialista, Rogelio Echeverry Palacios, consultor en gestión de riesgos públicos, dijo que la inseguridad y la violencia son las trabas más importantes para el avance de América Latina y el Caribe, ya que la población considera que la delincuencia es el problema más importante que tiene hoy la región, a su vez, Nelson Carmona Ramírez, consultor y asesor de seguridad pública de Colombia, habló de su experiencia sobre prevención y contención de la violencia en su país y señaló que es necesario depurar todos los factores donde se desarrolla y atender los elementos que la propician.

José Antonio Enríquez Tamez, secretario técnico del Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Chihuahua, consideró que los delitos de violencia son el resultado de las debilidades culturales, sociales y políticas, catalizadas oportunamente por los elementos delictivos.

En su intervención, José Trinidad Ramírez Tapia, Miembro del Concejo Mayor de Cherán de K´eri, Michoacán, comunidad que se caracteriza por la elección de sus autoridades sin la intervención de los partidos políticos, aseguró que la unión hace la fuerza y puso como ejemplo el movimiento llevado a cabo en esa población donde los ciudadanos enfrentaron de manera exitosa a invasores que anhelaban apodarse de sus bosques y territorio que con actos de violencia, a su vez, Gustavo Galicia Araujo, asesor de organizaciones civiles, dijo que no bastaba con hacer sólo diagnósticos de las problemáticas sociales, sino más bien impulsar el trabajo en conjunto entre la sociedad civil y las autoridades para frenar esta situación.

Al Seminario asistieron legisladores, investigadores, funcionarios, académicos y representantes de la sociedad civil, y los resultados serán recuperados para enriquecer el trabajo legislativo y debatir posibles soluciones.